



ESTRATEGIA CONTRA LOS DELITOS DE TRATA DE PERSONAS Y ATAQUES CON AGENTES QUÍMICOS CONTRA LAS MUJERES

**Dirección para la Eliminación de las Violencias
contra las Mujeres y Acceso a la Justicia.**

Secretaría Distrital de la Mujer

Contenido

1. Presentación	3
2. Introducción	4
3. Marco normativo	8
4. Objetivos de la Estrategia	11
4.1. Objetivo General	11
4.2. Objetivos específicos	11
5. Niveles de actuación de la estrategia	12
5.1. Incidencia en agenda normativa y políticas públicas	13
5.2. Orientación, activación de rutas, seguimiento e identificación de barreras en casos de trata de personas y ataques con agentes químicos	14
5.3. Fortalecimiento de capacidades a servidores y servidoras y ciudadanía	15
5.4. Articulación y coordinación interinstitucional e intersectorial	17
5.5. Gestión del conocimiento sobre ambos delitos	18
6. Condiciones para la operación de la Estrategia	19
6.1. Condiciones operativas, de seguridad y bienestar	19
6.2. Proceso de cualificación de la estrategia	20
6.3. Registro de la información	20
7. Fortalezas, logros y retos de la Estrategia contra los delitos de trata de personas y los ataques con agentes químicos	21
7.1. Fortalezas del proceso	21
7.2. Logros que se destacan	22
7.3. Retos Programáticos	23
8. Bibliografía	24

Tabla de ilustraciones

Ilustración 1. Normativa relacionada con el delito de trata de personas en Colombia	9
Ilustración 2. Normatividad referente al delito de lesiones con agente químico para Colombia	11
Ilustración 3. Niveles de actuación de la Estrategia	12

1. Presentación

El abordaje de los delitos de trata de personas y ataques con agentes químicos concebidos como parte de las violencias que afectan a las mujeres, se ha ido posicionando paulatinamente como una apuesta distrital, en el marco del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. Entendiendo la importancia de incluir los enfoques de género, diferencial y de derechos de las mujeres, desde el 2013, la Secretaría Distrital de la Mujer por medio de la Dirección de Eliminación de Violencias contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, ha venido realizando acciones en materia de atención, prevención y protección de las mujeres víctimas de estos delitos.

Si bien cada uno de estos delitos vulnera los derechos de las mujeres de manera diferente, ocurren en contextos particulares y sus efectos sobre las vidas y cuerpos son específicos, se entienden aquí como expresiones exacerbadas y sofisticadas de las violencias contra las mujeres, que se reproducen en contextos patriarcales de desigualdad estructural, en donde los mecanismos tradicionales para ejercer poder disminuyen su efectividad y los órdenes sociales en torno al género buscan estrategias para devolver a las mujeres a los lugares y roles que les han sido asignados.

Precisamente fue este núcleo conceptual la base justificativa para unificar el abordaje de estos dos delitos bajo la Estrategia contra los Delitos de Trata de Personas y Ataques con Agentes

Químicos contra las Mujeres, concebida como una apuesta de la administración distrital en cabeza de la Secretaría Distrital de la Mujer y en diálogo con la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género.

Desde la estrategia se pretende:

- ▶ Tener incidencia tanto en la agenda normativa, como en los procesos de formulación y ajuste de políticas públicas,
- ▶ Orientar técnica y conceptual en los espacios estratégicos de toma de decisiones,
- ▶ Ser herramienta efectiva para la activación de rutas, seguimiento a casos e identificación de barreras de atención,
- ▶ Contribuir al fortalecimiento de capacidades a servidores y servidoras y de la ciudadanía en general para la comprensión y atención de los delitos en mención,
- ▶ Avanzar en la gestión del conocimiento frente a ambos delitos que permita entender sus dinámicas para mejorar la respuesta institucional y social.

De igual manera y de cara a la necesidad de formular los lineamientos estratégicos, conceptuales y técnicos para la operación del nuevo equipo de trabajo, se construyeron tres documentos rectores de las acciones que se desarrollan para ambos delitos, desde los enfoques de género, diferencial y de derechos de las mujeres.

El primero da cuenta de los referentes conceptuales bajo los cuales se analizan estos delitos, entendidos como violencias

exacerbadas y sofisticadas contra las mujeres, cuáles son los escenarios de ocurrencia, por qué tienen una incidencia diferencial en las mujeres y cuáles son los impactos específicos sobre los cuerpos y vidas de las víctimas.

El segundo desarrolla una guía conceptual para la implementación de la Estrategia en el Distrito haciendo especial énfasis en los lineamientos para la orientación, activación de rutas y seguimiento de casos de trata de personas y de ataques con agentes químicos contra las mujeres, que incluye los niveles de atención, los criterios para la activación de la Estrategia, sus respectivos canales de remisión, rutas de orientación y activación de rutas por delito, recomendaciones para la atención de mujeres víctimas o en riesgo de trata de personas y de ataques con agentes químicos, criterios de cierre de casos, condiciones para la operación de la Estrategia y registro de la información.

Adicionalmente, poniendo de manifiesto la coyuntura política de cambio de administración es importante visibilizar los acuerdos necesarios que permitan dar continuidad a los procesos que ha iniciado la Estrategia, en cada uno de sus frentes de acción. A partir de allí este tercer documento que se presenta a continuación desarrolla los objetivos y características de la Estrategia, sus niveles de actuación y el balance del cuatrienio frente a ambos delitos.

2. Introducción

La Secretaría Distrital de la Mujer es un organismo del sector central creado mediante el Acuerdo Distrital 490 de 2012, que cuenta con autonomía administrativa y financiera y cuyo objetivo es “liderar, dirigir, coordinar, articular y ejecutar las etapas de diseño, formulación, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas, para las mujeres, con el fin de dar cumplimiento a la política pública, programas, acciones y estrategias”. Desarrolla su estructura organizacional a partir del Decreto Distrital 428 de 2013, en el cual se definen como funciones de la Dirección de Eliminación de Violencias contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, entre otras, las siguientes: b). Diseñar e implementar estrategias y acciones dirigidas a garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias; c). Diseñar estrategias que propendan por la superación de los obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder a la administración de justicia en el Distrito Capital; e). Dirigir e implementar acciones para la prevención, atención y protección integral a las mujeres víctimas de violencias; h). Implementar acciones orientadas a prevenir, atender, proteger y denunciar el delito de trata de personas, en los casos en que las víctimas de este tipo de violencia sean las mujeres.

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, ratificada por el Estado colombiano mediante la Ley 248 de 1995, define la violencia contra la mujer como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento

físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”. Así mismo, la Ley 1257 de 2008 “por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de las formas de violencia y discriminación contra las mujeres” recoge y amplía esta definición incluyendo la omisión y las amenazas de tales actos como conductas integrales de la violencia contra las mujeres y establece las medidas para la atención, prevención y sanción de estas violencias.

En cumplimiento de las funciones asignadas y en atención a lo dispuesto en la Ley 1257 de 2008 la Dirección desarrolla estrategias y acciones tendientes a la eliminación de las distintas formas de violencias contra las mujeres a través de la implementación del Sistema Orgánico Funcional Integral y Articulador para la Protección a Mujeres Víctimas de Violencias-SOFIA, creado mediante el Acuerdo Distrital 421 de 2009 y actualizado por Acuerdo 703 de 2018 del Concejo de Bogotá.

Bajo la apuesta de hacer de Bogotá una ciudad sin violencias contra las mujeres, en donde puedan habitar todos los espacios libremente, sin sentirse inseguras o vulneradas, en el marco de la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, los diferentes equipos de la Secretaría Distrital de la Mujer y en coordinación con otras entidades del nivel distrital, nacional, internacional e incluso organizaciones de la sociedad civil, se ha venido planteado una serie de acciones orientadas a la prevención de las violencias contra las mujeres, al reconocimiento de sus derechos, los diferentes mecanismos disponibles para hacerlos efectivos y a la atención a mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia o que se encuentren en riesgo de serlo.

Precisamente como respuesta a estas necesidades se creó la Ruta Única de Atención para Mujeres Víctimas de Violencia y en Riesgo de Femicidio que en búsqueda del restablecimiento de los derechos que fueron vulnerados, brinda: 1) Orientación e

información sobre derechos, las formas de hacerlos efectivos, los servicios y entidades encargadas para la atención y protección integral, 2) Atención en salud física, mental, sexual y reproductiva, 3) Acceso a medidas de protección específicas e inmediatas para proteger su vida, las de sus hijas e hijos y evitar que los hechos se repitan o se agraven y 4) Acceso a la justicia, denuncia de los hechos para que sean investigados y que con ello se juzgue y se castigue al agresor. Así pues, es claro que una de las misionalidades de la Secretaría Distrital de la Mujer es desarrollar e incorporar estrategias y acciones en materia de prevención, atención, protección integral, seguimiento y evaluación de las violencias contra las mujeres, que a su vez se constituyen en los subsistemas integrados del Sistema SOFIA.

En el marco del abordaje de las violencias contra las mujeres, la Dirección de Eliminación de Violencias contra las Mujeres y Acceso a la Justicia ha priorizado dos delitos que, por ser violencias basadas en género, merecen especial atención y una orientación técnica desde el enfoque de género y de derechos de las mujeres, entendiendo que las violencias contra las mujeres, en el siglo XXI bajo un contexto de globalización, han encontrado diferentes formas de expresión basadas en la tradicional estructura patriarcal de poder.

Anteriormente, las violencias contra las mujeres eran entendidas como eventos en el marco de lo privado, pero su radicalización y frecuencia, así como los procesos de defensa de derechos han hecho que, progresivamente, se aborden como problemas públicos que requieren de la implementación de acciones gubernamentales para erradicarlas. Las acciones contra la violencia contra las mujeres y los logros alcanzados en materia de equidad han implicado también una reconfiguración de las relaciones de poder y de las modalidades y dinámicas con que se ejerce, emergiendo así, expresiones de violencia caracterizadas por la exacerbación y sofisticación

Los delitos de trata de personas, en cualquiera de sus finalidades de explotación, y de lesiones por ataque con agente químico son entendidos como violencias exacerbadas contra las mujeres que encuentran su sustento en las desigualdades de género, buscan reducir a las víctimas en todas sus cualidades y virtudes, vulnerando un sinnúmero de aspectos de sus vidas y que además generan un impacto mayor y diferenciado sobre lo que se entiende en la sociedad como femenino.

Lejos de ser “casos aislados”, la sistematicidad de su ocurrencia muestra la relación con las históricas formas de control sobre las mujeres y las justificaciones del uso de la violencia para sostener las posiciones subordinadas que han ocupado y ocupan en la sociedad. Las mujeres que son víctimas de trata de personas o de ataques con agentes químicos, estructuralmente se encuentran inmersas en un continuum de violencias en cuyo contexto, además, se identifican factores de riesgo asociados a dinámicas de género, que detonan la victimización en uno de estos dos delitos.

En este escenario cobra especial importancia visibilizar la trata de personas y los ataques con agentes químicos, como dos formas de violencia contra las mujeres basadas en género, que obedecen a la lógica patriarcal de perpetuar la subordinación de las mujeres. Por un lado, la trata de personas, considerada la esclavitud del siglo XXI, es la instrumentalización de las mujeres, para la obtención de beneficios, mayoritariamente económicos, a través del uso de sus cuerpos en diferentes formas. Por su parte, los ataques con agentes químicos son el escalamiento del castigo a la autonomía de la mujer que, en calidad de venganza, son marcadas para siempre, por salirse de los lugares y los roles que tradicionalmente han sido asignados a ellas y que se presenta, con mayor frecuencia, en los contextos de relaciones de expareja en donde la mujer ejerce su libertad y autonomía ante la finalización del vínculo. La Ley 985 de 2005 define la trata de personas como “la

captación, el traslado, la acogida o recepción de individuos dentro o fuera de las fronteras de un país con fines de explotación”. Se entiende como “una de las peores violaciones a los derechos humanos, toda vez que desconoce la dignidad, despojando de su autonomía y libertades fundamentales, limitando el ejercicio del libre desarrollo de su personalidad y ciudadanía” (Secretaría Distrital de la Mujer & Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2015, p. 5). La trata de personas se configura como un delito que se presenta siempre como una forma de ejercer control sobre las víctimas en el desarrollo de su proyecto de vida.

Desde la otra arista, la Ley 1773 de 2016 define el delito de lesiones con agentes químicos, ácido y/o sustancias similares como “el que cause a otro daño en el cuerpo o en la salud, usando para ello cualquier tipo de agente químico, álcalis, sustancias similares o corrosivas que generen destrucción al entrar en contacto con el tejido humano”. Se entiende que existe un ataque con agente químico contra una mujer, cuando de manera premeditada se arroja alguna de estas sustancias (ácidos, álcalis u otros corrosivos) sobre el cuerpo de la víctima, con la intención de causar perjuicios permanentes en su vida, como desfigurarla, torturarla o incluso asesinarla, por razones directamente asociadas a su condición de género.

La forma en cómo operan estos delitos, las características de las víctimas y de los victimarios, las circunstancias en que se presentan, la lectura que se hace de los cuerpos y vidas de las mujeres y sujetos feminizados y los fuertes impactos físicos, psicológicos, económicos, sociales, sobre la familia y para el género femenino en su conjunto han puesto de manifiesto la necesidad de contar con un equipo profesional especial, con capacidad técnica y conceptual, que brinde directrices para el entendimiento y abordaje de estos delitos, desde el enfoque de género y de derechos de las mujeres.

Dada entonces la necesidad de hacer una lectura y un abordaje adecuado de estas dos formas de violencia, la Secretaría Distrital de la Mujer implementa la Estrategia contra los delitos de trata de personas y ataques con agentes químicos contra las mujeres, entendida como el conjunto de acciones planificadas y especializadas que orientan el quehacer en torno a los delitos de trata de personas y ataques con agentes químicos, con el fin de guiar la toma de decisiones en materia de abordaje, prevención y atención de estas violencias contra las mujeres en Bogotá.

La Estrategia articula, orienta y realiza seguimiento a las rutas de atención para mujeres víctimas de los delitos de trata de personas y ataques con agentes químicos, realiza actividades de intercambio de conocimientos y experiencias, adelanta procesos de empoderamiento con ciudadanas, contribuye al fortalecimiento institucional y de la articulación interinstitucional en materia de prevención y atención y aporta a la comprensión de los fenómenos desde el enfoque de género, entendiendo ambos delitos desde sus particularidades y como expresiones exacerbadas y sofisticadas de las violencias contra las mujeres.

Esta Estrategia recoge y parte de la experticia en el manejo de cada delito y aporta a la potencialización de las acciones de la Secretaría y de otras entidades distritales para lograr un mayor impacto, tanto en la vida de las mujeres en riesgo y víctimas, como en los escenarios de toma de decisiones de cara a la prevención, atención y protección y judicialización de los delitos de trata de personas y ataques con agentes químicos. Todo esto como parte de la apuesta del gobierno distrital hacia la transformación de Bogotá como un territorio seguro y libre de violencias contra las mujeres.

Con el objetivo de visibilizar el qué hacer de la Estrategia en torno a ambos delitos, así como sus principales fortalezas, logros y retos programáticos y la incidencia que ha logrado tener en la agenda distrital, el presente documento se estructura en 7 capítulos, siendo el primero de ellos la presentación, el segundo esta introducción, el tercero una revisión de la normatividad internacional, nacional y distrital frente a ambos delitos, el cuarto refiere el objetivo general y los objetivos específicos de la Estrategia, el quinto realiza una descripción de los niveles de actuación desde los que se desarrollan cada una de las acciones de la Estrategia, el sexto describe las condiciones operativas necesarias para la implementación de la estrategia y el séptimo cierra con las fortalezas, logros y retos programáticos en el abordaje de ambos delitos durante el cuatrenio 2016-2019.

3. Marco normativo

El Estado colombiano, en aras de asegurar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres ha ratificado diferentes tratados internacionales en materia de derechos de las mujeres como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer –CEDAW–, ratificada a través de la Ley 051 de 1981 que obliga al Estado colombiano a tomar medidas concretas en aras de eliminar la discriminación contra las mujeres, específicamente a través de la formulación y expedición de leyes y políticas públicas y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres – Belem do Pará – ratificada mediante la Ley 248 de 1995, define la violencia contra las mujeres, los tipos de violencia y los ámbitos en los que se puede manifestar e igualmente obliga a los Estados parte, como Colombia, a adoptar medidas normativas y judiciales para la protección de las mujeres y les otorga la responsabilidad en materia de atención, prevención y sanción de las violencias contra las mujeres.

A partir de este marco internacional, el Estado colombiano ha realizado significativos avances legislativos, entre los que se resalta la sanción de la Ley 1257 de 2008 que busca prevenir y sancionar todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres. Dicha Ley, en su artículo 8, establece que entre los derechos de las mujeres víctimas de violencias se encuentran: recibir atención integral a través de servicios con cobertura suficiente, accesible y de la calidad; recibir orientación, asesoramiento jurídico y asistencia técnica legal con carácter gratuito, inmediato y especializado; recibir

información clara, completa, veraz y oportuna en relación con sus derechos; dar su consentimiento informado para los exámenes médico-legales en los casos de violencia sexual y escoger el sexo del facultativo para la práctica de los mismos; ser tratada con reserva de identidad al recibir la asistencia médica, legal o social; recibir asistencia médica, psicológica, psiquiátrica y forense especializada e integral para ellas y sus hijos e hijas; acceder a mecanismos de protección; la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición; y a decidir voluntariamente si puede ser confrontada con el agresor en cualquiera de los espacios de atención y en los procedimientos administrativos, judiciales o de otro tipo.

En los años 2003 y 2013 se reconocen como formas de violencias contra las mujeres la trata de personas y los ataques con agentes químicos en Colombia, respectivamente, lo cual evidencia avances normativos recientes y delitos relativamente jóvenes en el país. Los avances normativos en materia de estos dos delitos tienen características diferentes pues, por un lado, en el caso de trata de personas responden en primer lugar a mandatos internacionales y que han sido aterrizados no solamente a nivel nacional sino también a nivel distrital, contrario al caso de los ataques con agentes químicos que han respondido a demandas nacionales encabezadas por colectivos de mujeres víctimas de este tipo de violencia y cuyo abordaje ha sido principalmente desde el nivel nacional.

En primer lugar, en el caso de la trata de personas, en el año 2003, a través de la ley 800 se adopta la “Convención de las Naciones Unidas contra el crimen organizado transnacional” y el “Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente contra mujeres y niños”. En desarrollo de esta Ley, dos años más tarde, se promulga la Ley 985 de 2005: “Por medio de la cual se adoptan medidas contra la trata de personas y normas para la atención y protección de las víctimas

de la misma” que establece la implementación de la Estrategia Nacional Integral de Lucha contra la Trata de Personas como base para la formulación de planes de acción a nivel territorial y poblacional, cuyos objetivos principales tienen que ver con el desarrollo de marcos de información en torno a las dinámicas de la trata de personas, la prevención, judicialización y sanción del delito, la protección de las víctimas y la articulación institucional y cooperación internacional en la lucha contra el delito.

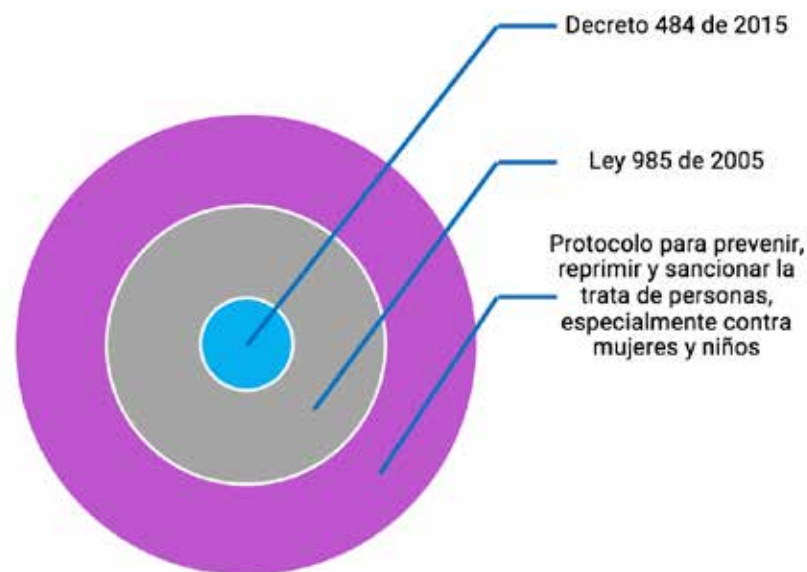
Dentro de la misma se contempla el enfoque territorial en los siguientes términos: “Los entes territoriales adecuarán y desarrollarán programas de lucha contra la trata de personas con base en la Ley 985 de 2005 y la Estrategia Nacional Integral de Lucha contra la Trata de Personas, atendiendo a las particularidades y diversidad regional y local, que permitirá brindar respuestas según la situación del territorio”. En este sentido, se ordena la creación de Comités regionales, departamentales y/o municipales contra la trata de personas, presididos por los respectivos gobernadores y/o alcaldes y se establece que los diferentes comités territoriales deben actuar sobre tres ejes fundamentales: i) prevención, ii) atención a las víctimas, y iii) judicialización.

Bajo este marco se crea el Comité Distrital para la Lucha contra la Trata de Personas de Bogotá - Distrito Capital, mediante el Decreto 484 de 2015, como un organismo articulador y coordinador de las acciones que desarrolle el Distrito para la atención, prevención, protección, denuncia y judicialización del delito, en el marco de la Política Pública de Lucha contra la Trata de Personas.

En este Decreto se incluye de forma activa a la Secretaría Distrital de la Mujer y se delega la Secretaría Técnica del Comité Distrital para la Lucha contra la Trata de Personas de Bogotá D.C., a la Secretaría Distrital de Gobierno por lo que dicha entidad, en el marco de sus competencias, es la responsable

de coordinar la atención a las víctimas de trata de personas, la implementación del Plan Distrital anual para la Lucha contra la Trata de Personas, articular la gestión de recolección de información y el fortalecimiento de los sistemas de información en relación con el delito de trata de personas en la ciudad de Bogotá, coordinar la articulación intersectorial en materia de lucha contra el delito, entre otras acciones. Sin embargo, teniendo en cuenta que este delito es una forma de violencia contra las mujeres basada en el género, el Sector Mujer, en el ámbito nacional y también en el distrital, está llamado a ejercer un rol fundamental en materia de prevención, atención, incidencia normativa y gestión del conocimiento.

Ilustración 1.
Normativa relacionada con el delito de trata de personas en Colombia



Fuente. Elaboración propia

En el caso de los ataques con agentes químicos en el año 2013 se firma la Ley 1639, que busca fortalecer las medidas de prevención, protección y atención integral a las víctimas de crímenes con ácido, álcalis o sustancias similares o corrosivas que generen daño o destrucción al entrar en contacto con el tejido humano. Dentro de esta Ley se contemplan las medidas para el control de la comercialización y venta de ácidos, se ordena la construcción de una ruta de atención integral y establece que se deben garantizar los servicios, tratamientos médicos y psicológicos, procedimientos e intervenciones necesarios para restituir la fisionomía y funcionalidad de las zonas afectadas, de manera gratuita y a cargo del Estado.

En el marco de la reglamentación de esta Ley, se expide el Decreto 1033 de 2014, que fortalece las medidas de protección a la integridad de las víctimas de crímenes con ácido y define la ruta intersectorial para su atención, estableciendo que la responsabilidad de la primera respuesta y de la dinamización de la ruta se encuentra en cabeza de la Policía, los Bomberos y del sector salud en general. De manera específica, frente al accionar de la Secretaría Distrital de la Mujer, este decreto establece que, con el objetivo de implementar la perspectiva de género en los casos en que las víctimas sean mujeres, las entidades responsables de la ruta de atención deberán coordinar con las Secretarías de la Mujer u Oficinas de Género la identificación de la oferta de servicios para el restablecimiento de sus derechos. Así mismo, indica que “las instituciones prestadoras de servicios de salud deberán informar a las Secretarías de la Mujer u Oficinas de Género de las entidades territoriales, sobre la existencia de víctimas de ataques con sustancias, para que dichas dependencias inicien el acompañamiento y seguimiento en la ruta integral de atención (Anexo técnico, Componente 2.1.1).

Este mismo año, el Ministerio de Salud y Protección Social

expidió la Resolución 4568 de 2014, que adopta el protocolo de atención de urgencias a víctimas de ataques con agentes químicos, la Resolución 2715 de 2014 que reglamentó las sustancias que deben ser objeto de registro de control de venta al menudeo y la Circular 016 de 2014 titulada “exención concurrente del pago de cuotas moderadoras y copagos por leyes especiales a las víctimas de agresiones por ácidos, álcalis o sustancias corrosivas”.

Posteriormente, para el año 2016 se expide la Ley 1773 que crea el tipo penal autónomo del delito de lesiones con agentes químicos, ácido y/o sustancias similares, que al entrar en contacto con el tejido humano lo destruye, entre otras disposiciones y, en su artículo 7, ordena al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud y Protección Social, formular una política de atención integral dirigida a las víctimas quemadas con agentes químicos, garantizando el acceso a la atención médica y psicológica integral. Así mismo, para fortalecer la atención en salud, la Superintendencia Nacional de Salud expidió la Circular 008 de 2017, titulada “Instrucciones respecto a la ruta de atención integral víctimas de ácidos, álcalis o sustancias corrosivas”.

Ilustración 2.

Normatividad referente al delito de lesiones con agente químico para Colombia



Fuente. Elaboración propia

Es importante destacar que en ambos delitos, se ha avanzado en la inclusión del enfoque de género en la normativa relacionada previamente, como principio orientador para su abordaje, con el fin de que las acciones que se realicen en materia de prevención, atención y protección, partan de los principios de equidad, igualdad y respeto de los derechos humanos, reconozcan las relaciones de poder jerarquizadas entre hombres y mujeres que subordinan y discriminan a las mujeres y establezcan estrategias para transformar estas relaciones y sus marcos estructurales.

4. Objetivos de la Estrategia

4.1. Objetivo General

Orientar técnicamente a los servidores y servidoras en el abordaje de los delitos de trata de personas y ataques con agentes químicos contra las mujeres desde los enfoques de género y de derechos de las mujeres, a través de la articulación y el fortalecimiento interinstitucional, la activación de rutas de atención y protección para el restablecimiento de los derechos de las víctimas y la implementación de estrategias de prevención de estos delitos en la ciudad de Bogotá.

4.2. Objetivos específicos

1. Incidir técnicamente en la agenda normativa y de políticas públicas que atañen a los delitos de trata de personas y de ataques con agentes químicos.
2. Orientar técnicamente a los servidores y servidoras del Distrito en el abordaje de los delitos de trata de personas y ataques con agentes químicos desde los enfoques de género, diferencial y de derechos de las mujeres.

3. Activar las rutas distritales de atención y protección creadas para los casos de trata de personas y ataques con agentes químicos.
4. Fortalecer las capacidades de los servidores y servidoras y de la ciudadanía en general, frente a los delitos de trata de personas y de ataques con agentes químicos
5. Participar activamente en los espacios de coordinación intra e interinstitucionales e intersectorial en los cuales se abordan los delitos de trata de personas y de ataques con agentes químicos.
6. Incidir en la gestión del conocimiento técnico y conceptual frente a los delitos de trata de personas y de ataques con agentes químicos en Bogotá.

5. Niveles de actuación de la estrategia

La Estrategia contra los delitos de trata de personas y los ataques con agentes químicos contra las mujeres contempla cinco niveles de actuación estratégicos definidos a partir del análisis del marco de acción de ambos delitos, encontrando los puntos de conexión entre ambos e intentando llenar los vacíos en el abordaje institucional, social y político en materia de prevención, atención y protección. Adicionalmente, se contemplan acciones transversales a los cinco niveles de actuación que complementan y hacen posible la implementación de la estrategia en términos operativos y administrativos.

Ilustración 3.
Niveles de actuación de la Estrategia



Fuente. Elaboración propia

En términos prácticos vale la pena resaltar que todas las acciones que se desarrollan desde los diferentes niveles de actuación parten del conocimiento técnico y conceptual de las profesionales con respecto a ambos delitos, pero sobre todo de la retroalimentación de las acciones adelantadas por el equipo en la cotidianidad. Esto permite realizar aportes pertinentes en los diferentes escenarios, con base en conocimientos actualizados en torno a las dinámicas de ambos delitos en la ciudad, generando impacto en los procesos de prevención y atención y en la gestión del conocimiento de la trata de personas y de los ataques con agentes químicos contra las mujeres.

5.1. Incidencia en agenda normativa y políticas públicas

Si bien, en la actualidad los delitos de trata de personas y ataques con agentes químicos cuentan con marcos normativos específicos, se han identificado vacíos que impiden poder llegar con todas las herramientas necesarias a las víctimas, brindarles atención y acompañamiento integral que posibilite de manera real el restablecimiento de sus proyectos de vida en forma autónoma. Estos vacíos corresponden de manera general a la falta de comprensión de los delitos desde el enfoque de género, diferencial y de derechos de las mujeres, lo que ha generado que las estrategias de prevención y las rutas de atención y protección a las que acceden las ciudadanas presenten múltiples barreras, donde el desconocimiento frente a factores de discriminación y desigualdad como cimiento de las violencias contra las mujeres, convierten las acciones que se adelantan en revictimizantes e insuficientes para la garantía real y efectiva del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias.

En este sentido, el primer nivel de actuación consiste en desarrollar las acciones necesarias para incidir en los diferentes espacios de coordinación intra e interinstitucional y de toma de decisiones, en el fortalecimiento de las herramientas existentes, tanto normativas como de política que están formuladas para contribuir al restablecimiento de los derechos de las mujeres que entran en contacto con la estrategia porque han sido víctimas de uno de estos dos delitos.

Este nivel de actuación, desde una perspectiva de género, responde básicamente a la necesidad de que el abordaje de los delitos contemplados acá cuenten con “una estrategia para asegurar que las experiencias y preocupaciones [...] de las mujeres, constituyan una dimensión integral en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas y programas en las esferas políticas, económicas y sociales, de modo que hombres y mujeres se beneficien igualmente y que las desigualdades no se perpetúen” (Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, 2009, p. 135).

Por ende, el objetivo de este nivel es incidir en la formulación de acciones para la resolución de vacíos legislativos, la disminución de las barreras de atención y protección y el posicionamiento del tema en la agenda pública distrital a partir de los enfoques de género y de derechos de las mujeres para la garantía efectiva del derecho a una vida libre de violencias.

Para ello se contempla, entre otras acciones, la participación en los espacios de construcción de la Política Pública de Lucha contra la Trata de Personas para incluir el enfoque de género en las acciones propuestas; brindar apoyo técnico en los espacios de construcción de la Política Pública de Actividades Sexuales Pagadas desde los puntos de posible encuentro con el delito de trata de personas; participar en las actividades propuestas para la actualización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de

Género propendiendo por la inclusión de acciones referentes a la prevención y atención a víctimas de los delitos de trata de personas y ataques con agentes químicos; y gestionar, coordinar y participar en los escenarios de incidencia para actualizar la normativa vigente y subsanar los vacíos normativos referentes al delito de ataques con agentes químicos.

5.2. Orientación, activación de rutas, seguimiento e identificación de barreras en casos de trata de personas y ataques con agentes químicos

El abordaje de los delitos de trata de personas y ataques con agentes químicos requiere una experticia específica que conozca las dinámicas del delito, tanto para su prevención como para su atención, que comprenda los impactos psicosociales generados a las víctimas y que parta de un enfoque de género y de derechos para el restablecimiento efectivo e integral de los derechos de las víctimas o las mujeres en riesgo. En ese sentido, se ha evidenciado la necesidad de que la Estrategia brinde orientación técnica a las instituciones y organizaciones responsables y competentes en las rutas de prevención, atención y protección diseñadas para el abordaje de estos delitos en el Distrito.

Por lo anterior, en este nivel de actuación se realizan gestiones para garantizar la respuesta oportuna de los demás sectores y entidades competentes de cara al restablecimiento integral de los derechos de las mujeres víctimas o en riesgo, así como

el acceso prioritario a la oferta institucional en materia de justicia, empleo, educación y salud. Esto en aras de minimizar las posibilidades de revictimización institucional, identificando las barreras en el acceso a servicios, proponiendo alternativas para su eliminación y garantizando el registro de las gestiones realizadas. Así mismo, se orienta a las mujeres con el fin de aportar a su empoderamiento para gestionar sus proyectos de vida, fortaleciendo los recursos de afrontamiento, aportando al ejercicio de asociatividad y ciudadanía y contribuyendo a mejorar la toma de decisiones de las mujeres víctimas de estas expresiones de violencia exacerbadas.

Este nivel de actuación comprende la orientación, seguimiento, identificación y documentación de factores de riesgo y de barreras de acceso, en casos de víctimas o mujeres en riesgo de ataques con agentes químicos y trata de personas, así como otras formas de violencia. Estas acciones están dirigidas principalmente a servidores/as que orientan y atienden estos delitos, apoyando la respectiva activación de rutas con las entidades competentes de la primera respuesta como la Secretaría de Gobierno, en los casos de trata de personas, y la Secretaría de Salud (o el sector salud en general), en los casos de ataques con agentes químicos, así como establecer relaciones de coordinación con las demás entidades competentes con el fin de aportar a la garantía de una respuesta integral. Al respecto es importante destacar que en este nivel de actuación se hace énfasis en la identificación de alertas tempranas para la prevención de la ocurrencia de los dos delitos y se busca apoyar la articulación interinstitucional para el abordaje integral de las víctimas o mujeres en riesgo desde un enfoque de género y de derechos, para impactar su vida en una apuesta de ciudad libre de violencias.

El procedimiento de activación de rutas corresponderá a lo establecido en los procedimientos de la Dirección de Eliminación de Violencias contra las Mujeres y a las rutas de atención establecidas a nivel institucional, distrital y nacional en torno a cada delito.

Los servicios de la Estrategia contra la Trata de Personas y los Ataques con Agentes Químicos son POST-EMERGENCIA con enfoque de género, de derechos y diferencial, de acuerdo con sus competencias institucionales. Estos servicios no reemplazan la atención en emergencia que deben recibir las ciudadanas por parte de las entidades responsables de la primera respuesta en materia de atención y protección. Así mismo, los tiempos de respuesta institucional responden a la disponibilidad del equipo, el interés y la voluntad de las ciudadanas frente al servicio, las necesidades y condiciones en las que se encuentren las ciudadanas, entre otros aspectos.

Teniendo este marco de referencia, la Estrategia se ha planteado cuatro niveles de atención que aplican para casos conocidos de ambos delitos, a saber: Orientación e información, activación de rutas, seguimiento y encuentros de conversación psicosocial y empoderamiento (ver en Estrategia Psicosocial de la Secretaría Distrital de la Mujer, 2019). En relación con este nivel, teniendo en cuenta las diferentes dinámicas y la naturaleza de cada delito abordado desde esta Estrategia, es necesario consultar el segundo documento mencionado en la introducción que aborda los lineamientos de orientación y activación de rutas de los delitos de trata de personas y ataques con agentes químicos a nivel institucional de acuerdo con las competencias y alcances de estos servicios en la Secretaría Distrital de la Mujer.

5.3. Fortalecimiento de capacidades a servidores y servidoras y ciudadanía

Una de las necesidades más importantes identificadas en el abordaje de los delitos de trata de personas y ataques con agentes químicos tiene que ver con el fortalecimiento de capacidades de servidores/as y ciudadanía a través de procesos de cualificación y empoderamiento en torno al derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. Esta propuesta surge a raíz de la identificación de desconocimiento teórico y práctico frente a ambos delitos, una lectura patriarcal de las historias de las mujeres que termina desconociéndoles sus derechos, se pone la carga del proceso en las víctimas, existe revictimización por parte de algunos funcionarios y funcionarias que realizan los procesos de atención, se da prevalencia de otras violencias por encima de estos dos delitos, falta de sensibilidad frente a los enfoques de género y de derechos de las mujeres, entre otros, que en últimas terminan obstaculizando las acciones para el restablecimiento de derechos de las mujeres.

Lo anterior, generó que la Estrategia diseñara un nivel de actuación dedicado a los procesos de fortalecimiento de capacidades con dos objetivos principales. Desde el lado de los servidores y servidoras, se busca crear una sensibilidad y una lectura particular en ellos que permita abordar estos delitos con los lentes del enfoque de género y de derechos de las mujeres. Esto redundará en contar con profesionales con la capacidad de orientar a las ciudadanas, brindarles la mejor atención y acompañamiento y que con ello las víctimas y mujeres en riesgo puedan desarrollar sus proyectos de vida.

Desde el lado de la ciudadanía, se apuesta a generar procesos de empoderamiento en derechos de las mujeres para disminuir el riesgo de ocurrencia de la trata de personas, de los ataques con agentes químicos y otras violencias, fortalecer los recursos de afrontamiento, contribuir a mejorar la toma de decisiones de las mujeres y generar acciones de resignificación de espacios y estrategias de comunicación en torno a la ocurrencia de estos delitos. Esto terminará ir formando una ciudadanía que conozca de sus derechos y cuente con las herramientas necesarias para hacerlos efectivos, en donde si bien las violencias ya tuvieron ocasión, se brinde desde este nivel, la posibilidad de que las mujeres puedan continuar con sus proyectos de vida.

Teniendo en cuenta lo anterior, en este nivel se realizan las siguientes acciones:

1. Realización de jornadas de sensibilización, actualización conceptual y normativa e intercambio de experiencias para los equipos de la Secretaría de la Mujer y de otros sectores en el Distrito.
2. Diseño de los contenidos para implementar estrategias de prevención a la ciudadanía en el marco de la actuación conjunta con otras entidades y dentro de la propia Secretaría Distrital de la Mujer, para cada uno de los delitos.
3. Realización de procesos colectivos de empoderamiento, consistentes en sensibilizaciones o encuentros de conversación psicosocial con poblaciones vulnerables al delito de trata de personas, como por ejemplo mujeres en ejercicio de actividades sexuales pagadas, mujeres habitantes de calle y mujeres en situación de migración vulnerable o con las resilientes de ataques

con agentes químicos, para fortalecer sus recursos de afrontamiento y mejorar la toma de decisiones para su bienestar emocional. Estos encuentros se han configurado como una buena práctica que permite compartir experiencias, crear redes de apoyo y especialmente contar con herramientas para la prevención de estas y de otras formas de violencia contra las mujeres.

4. Articulación de acciones de sensibilización y prevención con Organizaciones de la Sociedad Civil que trabajan por la defensa de los derechos de las víctimas o mujeres en riesgo de ambos delitos y generación de procesos de fortalecimiento de capacidades en materia de acompañamiento a las víctimas y al monitoreo y veeduría social de la respuesta institucional.
5. Apoyo al diseño e implementación de actividades y procesos de resignificación de espacios y estrategias comunicativas en materia de visibilización y prevención de los delitos, esto incluye, por ejemplo, la participación en fechas conmemorativas y campañas de prevención y difusión de las rutas de atención.

Al respecto de las tres últimas acciones se resalta, la importancia de contar con la ciudadanía como un actor activo en la prevención de los delitos de trata de personas y de ataques con agentes químicos, entendiéndoles como aliados/as en la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias y la construcción de una ciudad más segura.

5.4. Articulación y coordinación interinstitucional e intersectorial

Teniendo en cuenta que la trata de personas y los ataques con agentes químicos son formas de violencia basadas en género y que normativamente los dos delitos se encuentran bajo la responsabilidad y coordinación de entidades diferentes a la propia Secretaría, es crucial considerar la importancia de articular el trabajo de la Estrategia con las iniciativas distritales, nacionales y de las organizaciones no gubernamentales. Por un lado, desde este nivel es clave propiciar los espacios y las acciones necesarias que le permitan a la Estrategia articularse con Sistema Orgánico Funcional Integral y Articulador-SOFIA para la protección a mujeres víctimas de violencias, especialmente desde los ejes de prevención y atención buscando garantizar una oferta institucional oportuna y eficiente para las mujeres víctimas de estas dos violencias, llegando también a las diferentes localidades de la ciudad.

Por otro lado, la responsabilidad de la Secretaría Distrital de la Mujer frente a ambos delitos es de tipo subsidiaria y corresponsable en todas las etapas, por lo cual la coordinación interinstitucional e intersectorial aparece como una herramienta fundamental para el abordaje de la trata de personas y de los ataques con agentes químicos. En las rutas de atención que establece la normativa participan diferentes entidades, cada una aportando desde sus competencias, para el restablecimiento de los derechos que les fueron vulnerados a las mujeres. Precisamente, con el objetivo de brindar una asistencia holística que cubra todas las facetas de la vida y las diferentes necesidades que puedan tener en materia de salud, justicia, protección, educación y trabajo, la Estrategia participa de manera activa en todos los espacios interinstitucionales en donde se abordan estos delitos a nivel distrital y nacional

aportando su experticia técnica y práctica para garantizar la lectura de los casos desde el enfoque de género, diferencial y de derechos de las mujeres.

Por lo anterior, la Estrategia priorizó la participación en la Mesa Interinstitucional para la prevención y atención de los ataques con agentes químicos y en el Comité Distrital de Lucha contra la Trata de Personas y sus respectivas mesas técnicas de atención y protección, prevención y judicialización, así como espacios interinstitucionales formales. Sin embargo, sus acciones no solamente se circunscriben a estos dos espacios. Teniendo en cuenta que las víctimas necesitan de una atención oportuna en diferentes ámbitos es necesario contar con espacios adicionales periódicos en donde se puedan revisar los casos que se está apoyando, se tramite la solución frente a las barreras de atención identificadas, se diseñen estrategias multilaterales de coordinación para hacer más expeditos los procesos y acciones de prevención frente a estas violencias en donde se pueda contar con la sinergia de las entidades distritales, nacionales e internacionales con competencias frente a estos delitos y contando con la participación activa de las organizaciones de la sociedad civil.

5.5. Gestión del conocimiento sobre ambos delitos

El objetivo principal de este nivel es contribuir a la comprensión y abordaje de los delitos de trata de personas y ataques con agentes químicos con enfoque de género para visibilizar sus dinámicas propias y fortalecer la respuesta institucional de cara a la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias.

Este nivel de actuación contempla actividades como: i) fortalecer los instrumentos de captura y sistematización de información para los delitos de trata de personas y ataques con agentes químicos, dentro de la Secretaría y fuera de ella, ii) proponer ajustes al registro en el SiMisional, revisando las variables existentes para su ajustes y proponiendo nuevas, dependiendo de las características, manifestaciones y necesidades de cada uno de los delitos para sistematizar su alimentación periódica que permita recolectar información para la toma de decisiones y iii) producir documentos analíticos sobre los delitos de trata de personas y ataques con agentes químicos que den cuenta de su ocurrencia, manifestaciones en la ciudad y de las implicaciones que tienen sobre la vida de las mujeres.

Uno de los principales objetivos que se busca desde este nivel es trascender los problemas de subregistro que obstaculizan la comprensión de la ocurrencia de estos delitos en Bogotá. Igualmente, se entiende que este es un fenómeno común a todas las violencias de género y que por lo tanto la Secretaría Distrital de la Mujer está llamada a buscar las herramientas necesarias para poder visibilizar las diferentes manifestaciones e impactos de las violencias para que de esta manera se pueda fortalecer la respuesta institucional de cara a la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias.

El trabajo de la Estrategia ha permitido conocer de cerca cómo operan los delitos de trata de personas y ataques con agentes químicos en la ciudad. Se han identificado factores y escenarios de riesgo, modalidades de ocurrencia, potenciales víctimas, potenciales victimarios, circunstancias de los hechos victimizantes y manifestaciones que permiten comprender de manera holística la trata de personas y las lesiones por ataque con agentes químicos como violencias basadas en género. Sin embargo, este conocimiento requiere escalarse para trascender los límites de la propia Estrategia con el fin

de ampliar la comprensión de los dos delitos de forma tal que se contribuya a orientar y mejorar la toma de decisiones en la respuesta institucional.

Por lo anterior, a través de un trabajo cercano con la Dirección de Gestión del Conocimiento y con el Sistema Violeta se contempla la cualificación de la información existente, mejoramiento de su registro y fortalecimiento de los procesos de toma de decisiones en torno a los delitos de trata de personas y ataques con agentes químicos, no solamente dentro de la Secretaría Distrital de la Mujer, sino en el Distrito Capital, dado que las dos instancias son fuentes oficiales para el registro de datos y análisis de las violencias basadas en género en Bogotá.

6. Condiciones para la operación de la Estrategia

6.1. Condiciones operativas, de seguridad y bienestar

En aras de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Estrategia contra los delitos de la Trata de Personas y Ataques con Agentes Químicos, el equipo debe estar conformado por profesionales de diferentes áreas del conocimiento como ciencias sociales, derecho y áreas de la salud. Como mínimo debe estar integrado por dos profesionales líderes, con formación en psicología o trabajo social, para cada uno de los delitos, con conocimiento en derechos humanos, violencias basada en género y experiencia en el abordaje específico de los delitos de trata de personas y ataques con agentes químicos y atención a víctimas. Además, deberá contar con personal de apoyo profesional como abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales y profesionales en políticas públicas y derechos humanos.

Teniendo en cuenta las complejidades que implica el abordaje de estos delitos es necesario que desde la Secretaría Distrital de la Mujer se garanticen algunas condiciones mínimas en materia operativa y de seguridad para las profesionales que realizan la orientación y seguimiento a casos de víctimas

de trata de personas y de mujeres resilientes de ataques con agentes químicos. Esto incluye, entre otros aspectos: condiciones adecuadas de trabajo, profesionales líderes y de apoyo para cada uno de los delitos, disponibilidad de transporte cuando se deban hacer apoyos puntuales en la orientación y seguimiento de casos para aportar a salvaguardar la seguridad de las profesionales, disponibilidad de medios de comunicación como líneas móviles con WhatsApp y correo institucional.

Así mismo, es necesario reconocer los factores de riesgo psicosocial a los que están expuestas las mujeres y las profesionales que trabajan en prevención, atención y judicialización de las violencias contra las mujeres. Por ello, es fundamental establecer acciones continuas, desde un enfoque de cuidado, para hacer frente y tramitar los impactos que estos roles pueden traer consigo.

Al respecto, es necesario tener en cuenta las tres dimensiones identificadas por la Organización Internacional para las Migraciones (Organización Internacional para las Migraciones, 2018) en las cuales se hace importante realizar acciones enfocadas al cuidado de las personas que acompañan procesos de impacto psicosocial y trabajan con el abordaje de las violencias, que son: i) cuidado institucional, referido a las acciones que son responsabilidad de la organización o institución para disminuir y afrontar los factores de riesgo, ii) autocuidado, referido a las acciones que implican la propia responsabilidad en el cuidado físico y emocional, iii) cuidado de los equipos, referidas a las acciones realizadas al interior de los equipos de trabajo para prevenir e intervenir el desgaste generado por del trabajo¹.

¹ Consultar Estrategia Psicosocial de la Secretaría Distrital de la Mujer, 2019.

6.2. Proceso de cualificación de la estrategia

La implementación de la Estrategia implica el reconocimiento del carácter dinámico de las relaciones sociales, las disciplinas y las formas como se abordan las violencias contra las mujeres. Estos aspectos se encuentran en continuo análisis, cambio y validación. En este sentido, se requiere contar con procesos de actualización profesional constante, así como un compromiso con la producción del conocimiento propio desde la Secretaría Distrital de la Mujer.

El equipo de la Estrategia, así como los diferentes equipos de la entidad, deben contar con procesos específicos y permanentes de formación, capacitación e instrucción que acerquen a las y los profesionales a las reflexiones teóricas, empíricas y metodológicas más contemporáneas, que brinden herramientas conceptuales y metodológicas para el abordaje de estas formas de violencia, posibiliten la producción de conocimiento y faciliten la toma de decisiones interinstitucionales en el marco del Sistema SOFIA. Lo concerniente a la producción de conocimiento, implica tanto un ejercicio constante de sistematización de las experiencias de la Estrategia como la generación de análisis y reflexiones en torno a los delitos de trata de personas y ataques con agentes químicos, así como las buenas prácticas en materia de prevención, atención, protección y judicialización, etc.

las experiencias, el reporte de cumplimiento de las metas institucionales, la medición de los impactos en la ciudadanía y en las instituciones, entre otras variables relevantes. En este sentido, de manera específica las acciones concernientes a los niveles de actuación i) orientación, activación de rutas y seguimiento y ii) fortalecimiento de capacidades a ciudadanía y servidores/as deben registrarse semanalmente en el Sistema de Información Misional-SIMISIONAL dispuesto por la entidad, en el componente de Eliminación de Violencias, módulo “Estrategia contra la trata de personas y los ataques con agentes químicos”. Los lineamientos para su diligenciamiento deben ser consultados en los manuales establecidos por la Oficina Asesora de Planeación.

6.3. Registro de la información

El registro de la información que se genere a partir de las acciones desarrolladas en la Estrategia es parte fundamental de su implementación, permitiendo la sistematización de

7. Fortalezas, logros y retos de la Estrategia contra los delitos de trata de personas y los ataques con agentes químicos

La Estrategia contra los delitos de trata de personas y ataques con agentes químicos de la Secretaría Distrital de la Mujer es una apuesta nueva de la entidad para aportar hacia la comprensión de estas violencias desde el enfoque de género. En el transcurso de su primer año de implementación se lograron grandes avances alrededor de la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, por medio de la orientación técnica y conceptual a servidores y servidoras y a la ciudadanía en general para reconocer factores de riesgo, alertas tempranas y rutas de atención; activación de rutas, seguimiento a los casos activados e identificación de barreras de atención y puesta en marcha de mecanismos para superarlas; la realización de procesos de sensibilización con equipos internos (Línea Púrpura, Casas Refugio, Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres y Estrategia Justicia de Género) y de otras entidades públicas (Policía Nacional, Secretaría Distrital de Salud y Secretaría Distrital de Educación), la incidencia en la actualización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de

Género y del Decreto 1033 de 2014 y en la formulación de las Políticas Públicas de Actividades Sexuales Pagas y de Trata de Personas; la realización de cine foros en el marco del Día Mundial de Lucha contra la Trata de Personas en 16 de las 20 localidades de la ciudad; la primera conmemoración distrital de lucha contra los ataques con agentes químicos; realización de encuentros de empoderamiento con las mujeres resilientes de ataques con agentes químicos y con población en riesgo de trata de personas; participación activa en los espacios de coordinación interinstitucional, solo por mencionar algunas de las acciones más relevantes que se lograron desarrollar en esta vigencia.

7.1. Fortalezas del proceso

Dados los antecedentes institucionales en los que se ha venido abriendo paso la Estrategia desde el 2016, es importante reconocer el conocimiento y la cualificación conceptual y técnica ganada respecto al abordaje tanto del delito de trata de personas como de ataques con agentes químicos contra mujeres. Esto ha permitido que el equipo lidere la reflexión y el análisis acerca de estas violencias exacerbadas, contribuyendo a repensar los límites de las violencias contra las mujeres así como sus dinámicas de ocurrencia, en tanto son otras formas extremas de ejercer poder sobre los cuerpos de las mujeres, teniendo presente que están inscritas en el continuum de violencias y reconociendo sus bases estructurales.

Si bien la Secretaría Distrital de la Mujer no tiene la competencia directa respecto a la atención de estos dos delitos, a través de la Estrategia emprendida se posiciona una mayor comprensión interinstitucional en torno a la necesidad de ampliar las perspectivas de abordaje teniendo como eje el enfoque de género.

Los saberes y experticias puestas al servicio de la Estrategia, hacen posible que el equipo sea un referente importante de consulta y de asesoría para el campo institucional.

El enfoque de género adoptado desde la Estrategia ha permitido comprender a profundidad las dinámicas de tales delitos en la ciudad, así como abordar los impactos que estos generan sobre la vida de las mujeres.

El abordaje integral tiene, en el trabajo de campo que se realiza con las mujeres, un componente esencial, pues justamente es a partir del reconocimiento de la propia experiencia de las mujeres víctimas, que la Estrategia incorpora sus voces como base fundamental para el análisis y la toma de decisiones frente a estos delitos y al mismo tiempo, propicia la empatía con los diversos procesos e iniciativas que se adelantan por parte de organizaciones de mujeres víctimas y de sectores de la sociedad civil.

La apuesta por generar espacios de empoderamiento y conversación psicosocial permite avanzar hacia el reconocimiento de sus derechos y mecanismos para hacerlos efectivos, movilicen sus recursos de afrontamiento y transformen sus realidades resignificando las violencias de las que han sido víctimas.

El equipo de la Estrategia hace presencia activa en espacios de toma de decisiones lo que permite contar con los canales directos para aportar a que la respuesta institucional en materia de atención, prevención y judicialización sea más efectiva.

Como apuesta estratégica se formula una lectura y un discurso específico en torno al análisis de ambos delitos que se replica en espacios, tanto institucionales como de la sociedad civil, y que unifica el lenguaje, desde los enfoques de género y de derechos de las mujeres, para cualificar la comprensión y el abordaje de estos delitos como violencias contra las mujeres.

7.2. Logros que se destacan

El liderazgo de la Secretaría Distrital de la Mujer a través de la Estrategia en la orientación de casos (bajo análisis de contexto) y en la concertación de pautas para una adecuada respuesta institucional con enfoque de género y de derechos.

Por efecto de las diversas acciones que se implementan desde la Estrategia, se han logrado evitar ataques con agentes químicos y detener circuitos de trata de personas, dado que las acciones de prevención de Estrategia están pensadas desde la identificación de alertas tempranas y factores de riesgo en contextos específicos.

La Estrategia, a través de su equipo, ha realizado importantes aportes en las distintas mesas técnicas de coordinación interinstitucional previstas (Comité Distrital de Lucha Contra la Trata de Personas y la Mesa Interinstitucional de Prevención, Atención y Protección de Ataques con Agentes Químicos) relacionados con los mecanismos para abordar tales delitos en materia de atención, prevención, protección y judicialización, así como en la identificación y superación de las barreras de acceso institucionales.

A través del posicionamiento de la Estrategia se ha logrado brindar orientación y línea técnica en la construcción de diversos procesos de política pública en la ciudad relacionadas los derechos de las mujeres.

La apuesta por el reconocimiento de las voces de las víctimas, ha permitido fortalecer las capacidades de incidencia política de las diversas organizaciones con las que se viene consolidando un trabajo continuado de dialogo, interlocución y formación.

Desde el equipo se ha aportado en la orientación técnica y estratégica a servidoras y servidores para asumir los casos de manera asertiva y disponer de herramientas básicas para la mejora de la atención a las víctimas de ambos delitos.

Gestionar alianzas internacionales estratégicas que incluyen el intercambio de experiencias y la incorporación de buenas prácticas de cara a la prevención, atención y protección de los ataques con agentes químicos contra las mujeres.

7.3. Retos Programáticos

Robustecer la entidad a efectos de cualificar el abordaje de los delitos de trata de personas y ataques con agentes químicos en el marco de la agenda distrital dispuesta para la protección del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, en terminos de recurso humano, visibilidad del delito y compromiso institucional.

Frente a la dimensión y complejidad que encarnan ambos delitos, es necesario fortalecer en términos interdisciplinarios el equipo que conforma la Estrategia y dotarlo de herramientas técnicas, procesos de formación continuos, condiciones logísticas y tecnológicas y espacios de bienestar para su operación y funcionalidad en la ciudad. En este sentido, se debe contar como mínimo con dos profesionales líderes, con formación en psicología o trabajo social, para cada uno de los delitos, con conocimiento en derechos humanos, violencias basada en género y experiencia en el abordaje específico de los delitos de trata de personas y ataques con agentes químicos y atención a víctimas y con personal de apoyo profesional como abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales y profesionales en políticas públicas y derechos humanos.

Fortalecer la presencia de la Estrategia en el marco de los lineamientos técnicos y operativos del Sistema SOFIA como parte de la institucionalización de la misma, y en el entendido que dicho sistema se concibe como la estrategia articulada de la Administración Distrital para la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias.

Avanzar en la identidad programática, pedagógica y comunicativa de la Estrategia para contribuir a visibilizarla en la agenda distrital y consolidar su liderazgo dentro de la oferta institucional distrital en terminos misionales.

Consolidar la línea de gestión del conocimiento para producir análisis de contexto sobre los delitos de trata de personas y ataques con agentes químicos desde los enfoques de la Secretaría Distrital de la Mujer para mejorar la toma de decisiones estratégicas para la ciudad.

Garantizar la continuidad de los procesos que implementa la Estrategia frente a los delitos de trata de personas y ataques con agentes químicos.

8. Bibliografía

Alcaldía Mayor de Bogotá. (25 de noviembre de 2015). Decreto 484 de 2015. Disponible en: <https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=63863&dt=S>

Alcaldía Mayor de Bogotá. (30 de septiembre de 2013). Decreto 428 de 2013. Disponible en: <https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=54746&dt=S>

Concejo de Bogotá. (03 de julio de 2012). Acuerdo 490 de 2012. Disponible en: <https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=48201>

Concejo de Bogotá. (22 de diciembre de 2009). Acuerdo 421 de 2009. Disponible en: <https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=38265>

Concejo de Bogotá. (23 de abril de 2018). Acuerdo 703 de 2018. Disponible en: http://concejodebogota.gov.co/cbogota/site/artic/20180508/asocfile/20180508095007/acuerdo_no_703_de_2018.pdf

Congreso de Colombia. (02 de julio de 2013). Ley 1639 de 2013. Disponible en: <http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/2013/LEY%201639%20DEL%20%20DE%20JULIO%20DE%202013.pdf>

Congreso de Colombia. (04 de diciembre de 2008). Ley 1257 de 2008. Disponible en: https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3657_documento.pdf

Congreso de Colombia. (06 de enero de 2016). Ley 1773 de 2016. Disponible en: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=68134>

Congreso de Colombia. (10 de marzo de 1981). Ley 051 de 1081. Disponible en: <https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14153>

Congreso de Colombia. (13 de marzo de 2003). Ley 800 de 2003. Disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0800_2003.html

Congreso de Colombia. (29 de agosto de 2005). Ley 985 de 2005. Disponible en: https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/ley_985.pdf

Congreso de Colombia. (29 de diciembre de 1995). Ley 248 de 1995. Disponible en: http://www.defensoria.gov.co/public/Normograma%202013_html/Normas/Ley_248_1995.pdf

Escuela Judicial 'Rodrigo Lara Bonilla' (2009). Género y Justicia. Bogotá D.C. Consejo Superior de la Judicatura.

Ministerio de Salud y Protección Social. (29 de mayo de 2014). Decreto 1033 de 2014. Disponible en: <https://paginaweb.invima.gov.co/images/pdf/%C3%81cidos-%C3%A1lcalis/DECRETO%201033%20DEL%2029%20DE%20MAYO%20DE%202014.pdf>

UNODC & Secretaría Distrital de la Mujer (2015). Guía metodológica para la identificación y atención de escenarios de riesgo y respuesta a la Trata de Mujer, Niñas y Adolescentes en Bogotá D.C. Disponible en: https://www.unodc.org/documents/colombia/2017/Enero/UNO_Guia_metodologica_Mujeres.pdf